



La migración: Un desafío pendiente en América Latina

Claudia Vargas-Ribas

El siguiente se propone analizar brevemente cuáles son algunos de los desafíos de América Latina y el Caribe (ALC) en cuanto a la movilidad y la migración, teniendo en cuenta el patrón que ha tenido en los últimos años, el efecto pandemia y las propias particularidades de los países (políticas, económicas, sociales). Además, señalaremos algunas de las respuestas de los Estados y unas breves consideraciones que, según este argumento, podrían tener incidencia en el tema migratorio regional en el mediano y largo plazo. El énfasis estará puesto sobre Suramérica, considerando que alberga una de las poblaciones en movilidad más grandes en el mundo actualmente, la venezolana (la mayoría en condición de vulnerabilidad), Colombia es en una de las principales fronteras de acogida, al mismo tiempo que mantiene dinámicas importantes de desplazamiento interno, y Perú, ocupa el primer lugar de la región (segundo en el mundo) con mayor cantidad de población solicitante de refugio, y que junto a Colombia, figuran entre los corredores migratorios bilaterales más importantes a nivel global. Más que responder lo evidente, quisiéramos dejar planteadas

algunas cuestiones que deberían incorporarse a nuestros espacios de análisis pues van en línea con retos a nivel global en la materia y que nuestros países no pueden (ni deben) dejar de atender.

Contexto de América Latina y el Caribe (ALC)

Analizar los últimos cinco años en el mundo supone marcar un antes y un después de la llegada del COVID-19. En el caso de ALC, la región ya se encontraba ante grandes desafíos: disminuir la desigualdad social, enfrentar el incremento de la pobreza, el desempleo y el bajo crecimiento económico, además de ello, manejar una migración intra-regional (más de ocho millones de personas) de características, causas y proporciones heterogéneas, pero que muestran vulnerabilidades en distintas escalas que requieren de atención y respuestas. La pandemia terminó de poner en evidencia tales desigualdades y la necesidad de soluciones urgentes a algunos asuntos postergados que incluyen el migratorio.

El informe global de riesgos 2021 que publica el foro económico mundial, señala como principales riesgos para el mundo en los próximos dos años el aumento de la pobreza, debilitamiento de la cohesión mundial, desigualdad, desempleo, incremento de la brecha digital, cambios en los mercados y una alta incertidumbre social, especialmente entre los jóvenes (Global Risks Report, 2021).

En cuanto a los riesgos en el mediano y largo plazo —mantiene el informe— se encontraron cuatro asociados al medio ambiente y el fracaso en el abordaje e implementación de políticas en este tema, el riesgo sanitario, la persistencia o aparición de enfermedades y la crisis en medios de vida. Dentro de este último están incluidas las preocupaciones de los estados y personas por temas de seguridad como uso/fabricación de armas y el incremento en el índice de denuncias de parte de la ciudadanía, demandando condiciones de vida por una parte (empleo, acceso a salud, educación, tecnología, ente otras) y también en contra de las crecientes restricciones de los gobiernos —que al principio de la pandemia se solapaban con la emergencia sanitaria— pero de mantenerse, pudieran derivar en decisiones que quizás debilitarían (más) los valores democráticos y el respeto de los derechos.

El *Democracy Index* (2020) publicado por *The Economist*, nos presenta la mayor parte del mundo con democracias “imperfectas” o “regímenes híbridos”, que superan con un amplio margen a las democracias plenas, incluso en países donde aparentemente el Estado de derecho es una máxima de actuación. ALC no muestra características ni riesgos distintos a los planteados, de hecho, con la pandemia, se han intensificado; algunos indicadores de la Organización Internacional del trabajo (OIT) y CEPAL refuerzan este punto:

- Caída de la economía 7,7 %
- 10,6 % de desocupación laboral con 26 millones de empleos perdidos
- Uno de cada cuatro jóvenes se encuentra desempleado
- Retroceso de la participación femenina (OIT, 2020)

En cuanto a la situación social el informe *Panorama Social de América Latina* de CEPAL (2020) indica lo siguiente:

- Ralentizado el coeficiente GINI
- Problemas de asignación de recursos al sector salud a partir de los parámetros establecidos, lo cual complicó la situación por la COVID-19
- Deserción escolar en sectores más vulnerables (desigualdad entre acceso a tecnología y capacidades para responder al esquema a distancia)
- Aumento de la informalidad y repercusión directa sobre mujeres

Las secuelas sanitarias del COVID en ALC indican que la cifra de muertos supera el millón de personas (1.001.781), de los cuales 89 % se concentran en cinco países (cuatro suramericanos: Brasil Colombia, Argentina y Perú en ese orden) (OPS, mayo, 2021). En resumen, como mantiene el informe de la CEPAL, la pandemia llega a una región marcada por desigualdades donde *ejes estructurantes* como el género, raza, estrato socioeconómico, discapacidad, estatus migratorio, entre otros, pueden crear exclusión y aumentar la vulnerabilidad:

El impacto en la esperanza de vida dependerá de una serie de factores,

como la duración de la pandemia, la prevalencia y letalidad de la enfermedad en cada país, y el acceso de la población a las vacunas cuando estas se encuentren disponibles. (Cepal, 2020, p.21)

En este sentido la respuesta de la región ha sido lenta; aun cuando las medidas de prevención sanitarias aplicadas fueron las mismas de la mayoría de los países en el mundo (cuarentenas, restricciones de movilidad, aislamiento, distanciamiento físico, suspensión de actividades educativas, grupales y económicas, cierre de fronteras terrestres-aéreas), ALC no tiene las capacidades para mantenerlas después de un año, por el contrario, el resultado ha sido la profundización de la crisis que ha impactado ferozmente el sector más débil de la cadena, la población vulnerable, quienes han visto mermado sus ingresos, no pueden cumplir con sus responsabilidades, participar de las nuevas dinámicas educativas a distancia, están expuestos a mayor contagio y dependen de sistemas de salud débiles y en algunos casos colapsados.

El segundo camino es el de la vacunación, y la realidad es que la región todavía está lejos de alcanzar la inmunidad requerida (por diferentes razones y particularidades de los países); solo en Chile y Uruguay han logrado vacunar completamente la mitad de su población, por lo que se podría decir que, para inicios del próximo año, todavía encontraremos países que no habrán culminado la vacunación y otros ni siquiera habrán logrado la tan anhelada *inmunidad de rebaño*.

¿Qué pasa con la migración?

Dentro de todo este panorama, la movilidad y la migración de personas no se ha detenido, quizás por el cierre de fronteras o espacios aéreos se perciba una desaceleración, pero lo cierto es que las personas se siguen desplazando, la pregunta es ¿en qué condiciones?

Según el Informe sobre las migraciones en el mundo (OIM, 2020) 272 millones de personas son migrantes (3.6 % de la población mundial), de los cuales el 10.6 % solicitaron refugio o tienen esta condición, es decir, han tenido que salir de su país de origen porque su vida, sus derechos y libertades estaban en riesgo. Aunque los destinos han ido variando en los últimos veinte años, se mantienen algunos Estados como tradicionales receptores y emisores; en el primer grupo destacan Estados Unidos de América (EE.UU.) y países europeos (Alemania en

primer lugar) así como otros, que por su cercanía a países emisores, se convierten en alternativas para la población migrante como el caso de Arabia Saudita. Entre el segundo grupo, los emisores, se mantienen países como India, México y China y un repunte de Venezuela, aunque no destaca entre los primeros lugares.

En la región de ALC tenemos una población total de 646.430.784 personas (Banco Mundial, 2019) de los cuales –según el *International Migration Report 2019* del *Department of Economic and Social Affairs* (DESA)– 40.46 millones son emigrantes, la mayor parte ubicados en América del Norte (25.58), en segundo lugar figuran los propios países de la región (8.24 millones) y por último, Europa (4.98 millones). En cuanto a la inmigración, la región alberga 11.67 millones de inmigrantes, de los cuales 2.6 son de Europa y de América del Norte (en ese orden), seguido –como ya mencionábamos antes– de los más de 8 millones que se desplazan intrarregionalmente, es decir 1,27% de su población total.

Entre las dinámicas migratorias más conocidas en ALC de los últimos años (no las únicas), encontramos la de Nicaragua hacia Costa Rica, la de países Centroamericanos hacia EE.UU., pero usando México como país de tránsito, la de los propios mexicanos hacia el norte, la migración haitiana que ha tenido Chile, Argentina, Brasil y República Dominicana (especialmente luego del terremoto en 2010), la de Guatemala, Salvador y Honduras hacia Belice y la más reciente, no por nueva sino por el incremento exponencial en pocos años, la proveniente de Venezuela que, según cifras de R4V, más del 60 % está en cinco países de la región: Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil (R4V, mayo 2021).

Entonces... ¿Cuál es el reto?

Uno de los principales retos históricos de la región es el abordaje efectivo que representa la complejidad de un flujo mixto intrarregional, donde se encuentran migrantes laborales, económicos, los que se desplazan por reunificación familiar, con objetivos previamente definidos, pero también aquellos que lo hacen en condiciones de alta vulnerabilidad asociadas a los contextos tan variantes de los países de la región, o víctimas de mafias trasnacionales de trata y/o tráfico de personas donde algunas islas del Caribe figuran como destinos (Trini-

dad y Tobago, Aruba, Curazao, República Dominicana) y el 90 % de los casos identificados en Suramérica provienen de la misma región, con dinámicas bien complejas y variadas en cuanto a destinos (Reporte Global de trata, 2020).

El desafío de esta diversidad es que obliga a pensar en políticas públicas articuladas y con respuestas acordes a las necesidades de los distintos flujos, por lo tanto, se requiere de un trabajo de identificación y análisis de esas particularidades de la población migrante: contexto del país de origen, causas de la emigración y perfil de los migrantes (edad, género, estatus socioeconómico, condiciones de vida, nivel de estudio/ocupación). Dentro de ese reto deben incorporarse políticas/programas/protocolos/marcos de acción capaces de responder a escenarios que son difíciles de prevenir, por ejemplo, aquellas migraciones que se producen por eventos como una pandemia, desastres naturales y cambio climático, es decir, la región necesita de acciones que más allá de las causas, deriven en el reconocimiento, exista protección y apunten a una verdadera inclusión e integración para disminuir vulnerabilidades.

Otro reto importante es la falta de una política conjunta de los Estados en aspectos básicos como: gestión de fronteras, identidad, regularización e incluso interpretación y aplicación de acuerdos y compromisos internacionales en materia migratoria. Dentro de estos se incluyen aquellos regionales o subregionales derivados de sus procesos de articulación como Mercosur, CAN, Caricom, PROSUR y afines, que a pesar de tener mecanismos migratorios definidos, no siempre son aplicados o difieren en los criterios entre países.

A este hecho se le suman varios desafíos, por una parte, se requiere del seguimiento desde organismos internacionales (ejemplo AC-NUR-OIM) sobre la actuación de los países en la aplicación efectiva de pactos existentes en materia migratoria y de los cuales son signatarios, pues en algunos casos se observa omisión, incumplimiento o discrecionalidad en su aplicación; lo segundo, es necesario insistir en la revisión y análisis de los marcos jurídicos migratorios en los países, esta evaluación tendría como objetivo: 1- Identificar cuántos de ellos lo poseen, los organismos que se encargan de la migración; 2- Si difieren o son incompatibles con los pactos y acuerdos internacionales y 3- Revisar si estos instrumentos tienen enfoque de derechos humanos,

siendo este el marco mínimo para el respeto de los ciudadanos en movilidad más allá de sus características particulares (género, raza, estatus, nacionalidad).

Aunque la región no puede perder de vista los riesgos existentes: la desigualdad social imperante, el crecimiento de la pobreza y las propias dificultades en sus sistemas de salud con la reciente pandemia; tiene como reto respetar el derecho de las personas a circular libremente, buscar asilo y procurar el reconocimiento de su personalidad jurídica; valerse de las dificultades para justificar el cierre de frontera, militarización y la implementación o continuación de “muros jurídicos” que se observan en algunos países incluso antes del COVID-19, solo aumenta la vulnerabilidad de los migrantes.

Lamentablemente estas medidas son recurrentes en la región, en Perú se declara la petición de visa para reducir los movimientos migratorios de haitianos en 2012 (secuelas del terremoto 2010 y huracanes en 2012) y desde 2019 hasta la fecha, junto a Chile y Ecuador, repiten la medida con la población venezolana (por mencionar algunos) limitando la movilidad regular de poblaciones migrantes con grandes dificultades de origen, incrementando el riesgo, haciéndolos más vulnerables a mafias criminales y el aumento en el índice de migración con estatus administrativo irregular como se refleja en el 53 % de la población venezolana que emigra actualmente (cálculos propios a partir de información de R4V, datos de mayo 2021).

Otros hechos que impiden la movilidad regular son el cierre y militarización de fronteras en enero de 2021 entre Ecuador y Perú, las recientes expulsiones de población extranjera en Chile apelando a su legislación migratoria y la exposición de estas a través de voces oficiales y medios de comunicación con un mensaje que criminaliza a esta población, específicamente mostrando al migrante irregular como enemigo.

Estos hechos nos conducen a otro gran reto, los países deben hacer enormes esfuerzos por mirar y contar la migración como una oportunidad, esto significa: 1- Disminuir el discurso antinmigrante que genera xenofobia entre la población, desconfianza en las comunidades de acogida, problemas para la integración y ruptura del tejido social y 2- Deben enfocarse en entender y explicar las fortalezas que tiene esta

población para los países receptores, esto supone entender, gestionar y aprovechar la migración desde una perspectiva para el desarrollo que además iría en línea con la agenda 2030 planteada para los países en el mundo.

El cumplimiento de la agenda 2030 y específicamente el objetivo N° 10 “Reducción de las desigualdades” parece ser de los mayores retos para la región, más específicamente en materia migratoria “10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” (ONU, 2021) que garanticen regularización e inclusión, lo cual influye en el resto de los objetivos: eliminación de la pobreza, acceso a la salud y bienestar, a una educación de calidad y el trabajo decente.

En línea con lo anterior un reto evidente es implementar un enfoque de género en todas las políticas de atención migratoria, 49.1% de las personas migrantes en ALC son mujeres (DESA, 2019), son las más afectadas de la crisis y el 65% de las víctimas de trata (Reporte Global de trata, 2020), por lo cual generar estadísticas diferenciadas y programas enfocados en necesidades particulares de género, significan la inclusión de la mitad de la población en movilidad.

Existe la necesidad de atender retos que surgen de las coyunturas actuales en nuestra región y que claramente tienen una incidencia en la migración:

Aumento y diversificación de la migración por retrocesos en indicadores democráticos y procesos electorales: este retroceso en la región, la falta de libertades y el irrespeto a derechos civiles y políticos, podrían mantener y/o aumentar la migración de población como la venezolana, que enfrenta un autoritarismo, pero también de otros países cuyos derechos se han visto afectados y que se evidenciaron durante las medidas por pandemia.

En cuanto a los procesos electorales es fundamental estar atentos a cuáles serán las políticas en materia migratoria de los recientes candidatos electos en Perú, Ecuador y las venideras elecciones en Chile. Es muy importante que las instituciones de los estados, las organiza-

ciones internacionales, los Derechos Humanos (DDHH) y la sociedad civil, estén alertas de las campañas electorales, de los discursos de los candidatos —para declararse a favor o en contra de la migración— y de las acciones en torno al tema, cuyas directrices generalmente provienen del ejecutivo, lo que puede incidir en los inmigrantes de esas naciones, sus procesos de regularización o derivar en nuevas movilidades o desplazamientos (hacia terceros países) procurando alternativas, oportunidades y menos restricciones, pero con la misma falta de garantías de regularidad e inclusión.

También deben considerarse contextos como los de Haití (próxima a un proceso electoral en septiembre de 2021) y de Colombia; en ambos casos estamos hablando de países que han sido emisores de población y que pueden generar nuevos flujos. El caso de Colombia se complejiza por ser el principal receptor de migrantes de Venezuela (éxodo que no se va a detener por la situación en ese país), mantiene altos índices de desplazamientos internos y está en curso un proceso de regularización a la población venezolana del que todavía no se tienen resultados preliminares.

Desplazamientos por vacuna o acceso a la salud: No quisiéramos dejar de plantear que para algunos países está a punto de iniciarse una nueva ola de la pandemia frente a un proceso de vacunación que no sigue los mismos ritmos. ¿Habrá movilidad de personas por vacunación/atención por la COVID-19? ¿Los países en la región estarán preparados para asistir también a esta población en busca de vacunas? ¿Qué pasa con la población migrante irregular, considerando que la venezolana es la principal en la región y se ubica en un 53 %? Sin duda es un desafío evidente y de muy corto plazo para las naciones receptoras y sus sistemas de salud ya debilitados.

Para finalizar, hay algunos retos de mediano y largo plazo que pensamos deben incorporarse de cara al futuro:

Contrarrestar el aumento en los desplazamientos de jóvenes por su alta vulnerabilidad en una región con pocas oportunidades. La edad promedio de los migrantes en la región va desde los 28 años en países de ingresos bajos hasta los 34 en los de ingresos medios, siendo el promedio regional 39 años (DESA, 2019), es decir, población

económicamente activa (PEA). En escenarios de migración implica la disminución de la PEA en países de origen y que aumente en los destinos, la consecuencia clara es la posible pérdida para la región (o sus países más pobres) de competitividad, fuerza de trabajo, capital humano e intelectual y aumento de las desigualdades.

La incorporación en la discusión regional de temas como riesgo climático y migración por desastres naturales: Haití y Bolivia figuran entre los primeros 10 países con riesgo climático por desastres naturales, esto no solo puede generar flujos migratorios al exterior como ya ha pasado en Haití, sino también dentro de los países. La particularidad de estos eventos naturales es que son difíciles de prevenir, pero entender y considerar las probabilidades de ocurrencia, los antecedentes y crear marcos de acción ante diversos escenarios, es un buen comienzo para disminuir los riesgos en esas poblaciones.

Solo queda decir, tal como planteamos al inicio, que son muchos los retos de la región en materia migratoria, algunos evidentes y otros que deberían ser reconocidos e incorporados en agenda, procurando soluciones duraderas y efectivas en una de las épocas más difíciles de la región. Quedan más preguntas que respuestas y muchos desafíos pendientes por atender y analizar.

NOTAS

1. Informe global de migraciones (OIM)
2. Migration Report 2019 (DESA)
3. Con datos de Our World in Data (mayo 2021). <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>
4. Recordemos que la mayor población migrante de la región es la venezolana y más del 60 % se encuentra en alguno de esos países.
5. Para Haití los últimos once años no solo han sido difíciles por los desastres naturales sino, además, por la crisis política. Con respecto a Colombia, desde el 28 de abril de 2021 se iniciaron una serie de protestas en contra de la Reforma Tributaria propuesta por el ejecutivo. Sin embargo, pese a la suspensión de esta reforma y la intención del

establecimiento de un diálogo del Gobierno nacional con distintos sectores, las manifestaciones han continuado y revelan demandas sociales por temas coyunturales como la pandemia, de tipo económico y más recientemente, asociadas a la acción de organismos de seguridad para contrarrestar la protesta. En todo caso es un hecho muy reciente y merece ser analizado con mucha prudencia y considerarlo como una variable dentro de la situación colombiana actual.

6. Según el informe, Haití es uno de los países más afectados en el último decenio por desastres naturales y en el caso de Bolivia, los incendios forestales, la pérdida de la biodiversidad y las fuertes lluvias han generado algunas muertes y desplazamientos de poblaciones enteras desde zonas que aún son sensibles a estos desastres naturales. En ambos casos se trata de zonas/países con grandes debilidades socioeconómicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banco Mundial (2019). Población total en América Latina. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POPTOTL?locations=ZJ>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2020) *Panorama Social de América Latina*. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020>
- Department of Economic and Social Affairs, DESA (2019). *International migration Report* (2019). https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/InternationalMigration2019_Report.pdf
- Germanwatch (2021). *Global Climate Risk*. https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf
- Índice de percepción de la democracia (2020). <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020-download-success>
- Organización de las Naciones Unidas, ONU (2021). *La Agenda para el Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>
- Organización Internacional para las migraciones, OIM (2020). *Informe sobre migraciones en el mundo*. <https://publications.iom.int/system/>

files/pdf/wmr_2020_es.pdf

Organización Internacional del Trabajo, OIT (2020). *Panorama laboral 2020*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_764630.pdf

Organización Panamericana de la Salud, OPS (21 de mayo de 2021). *América latina supera el millón de muertes por Covid-19*. <https://www.paho.org/es/noticias/21-5-2021-america-latina-caribe-superan-millon-muertes-por-covid-19>

Our World in Data (2021) *Coronavirus (COVID-19) Vaccinations*. <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>

R4V: Plataforma de Coordinación Intrarregional para refugiados y migrantes de Venezuela. <https://www.r4v.info/es/stock>

United Nations Office on Drugs and crime (2020). *Reporte Global sobre Trata de Personas 2020*. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf

World Economic Forum (2021). *Global Risk Report 2021*. <https://es.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021>